

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



### SALA DE DECISIÓN LABORAL

El nueve (09) de febrero de dos mil veintitrés (2023), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, procede a proferir sentencia de segunda instancia, en el presente proceso ordinario laboral promovido por el señor **NÉSTOR ALIRIO LÓPEZ GIRALDO** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES** (en adelante COLPENSIONES) y la sociedad **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.** (en adelante PORVENIR S.A.), tramitado bajo el radicado No. 05001-31-05-003-2019-00212-01.

#### AUTO

De conformidad con el memorial de sustitución de poder, allegado vía correo electrónico junto con los alegatos de conclusión de segunda instancia por parte de la sociedad GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S. quien representa judicialmente los intereses de PORVENIR S.A. en este proceso, se procede a reconocer personería al abogado OCTAVIO ANDRÉS CASTILLO OCAMPO portador de la T.P. 380.131 del C. S. de la Judicatura, para que represente a PORVENIR S.A. en este proceso como apoderado sustituto.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos:

#### 1. ANTECEDENTES:

El demandante pretende con la presente acción judicial, que se declare la nulidad de su traslado al régimen pensional de ahorro individual con solidaridad (en adelante RAIS), ordenando su retorno al régimen pensional de prima media con prestación definida (en adelante RPM) administrado por Colpensiones.

**Como fundamento fáctico de sus pretensiones** relata el actor que inició sus cotizaciones en el sistema general de pensiones en el RPM, posteriormente se trasladó al RAIS por medio de la AFP HORIZONTE hoy PORVENIR S.A. en el año 2003.

Expone que el asesor de PORVENIR S.A. no le informó de las consecuencias que conllevaría su cambio de régimen pensional, las posibilidades de pensión en uno y otro, implicaciones de sus posibles beneficiarios en el monto de la mesada pensional, estimación simulada de la cuantía prestacional.

Indica que solicitó información necesaria a PORVENIR S.A. el 26 de febrero de 2018, a lo que dicha entidad no respondió.

Aduce que el 26 de febrero de 2018, presentó reclamación administrativa tendiente a obtener la devolución al RPM, como la nulidad en la afiliación al RAIS.

## **2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:**

El *a quo* despachó de manera desfavorable las pretensiones como fueron solicitadas en la demanda, y en su lugar declaró que PORVENIR S.A. faltó a su diligencia debida de buen consejo, declarando que la AFP PORVENIR S.A. faltó a su obligación de dar información clara, veraz y oportuna al señor NÉSTOR ALIRIO LÓPEZ GIRALDO y que dicha falta de información le causó un grave perjuicio económico en la mesada pensional del demandante, declarando además la responsabilidad profesional y constitucional de PORVENIR S.A. ante el incumplimiento de la obligación indebida de buen consejo.

Seguidamente declaró la inaplicación constitucional de pérdida del RPM acaecida en NÉSTOR ALIRIO LÓPEZ, cuando se trasladó del ISS a la AFP PORVENIR S.A. y en su lugar declarar que NÉSTOR ALIRIO LÓPEZ sigue inmerso en el RPM, pero a cargo de la AFP PORVENIR S.A., absolvió a COLPENSIONES de todas las pretensiones.

Acto seguido ordenó a PORVENIR S.A. que dentro del mes siguiente a la fecha en que el demandante lo solicite por escrito, se le reconozca, liquide y pague la pensión de vejez bajo el RPM, así mismo que al mes siguiente a que reconozca, liquide y pague la pensión de vejez, solicite por escrito de COLPENSIONES elaboración de cálculo actuarial pensional con miras a subrogación pensional.

También le ordenó a COLPENSIONES, que dentro de los dos meses siguientes a la fecha que se lo solicite PORVENIR S.A., elabore dicho calculo actuarial pensional con miras a subrogación pensional, seguidamente ordenó a PORVENIR que hasta tanto no reconozca, liquide y pague real y efectivamente el valor del cálculo actuarial pensional a COLPENSIONES, deberá continuar pagando las mesadas pensiones bajo el RPM al demandante.

Finalmente autorizó a PORVENIR S.A. a conjugar parte del cálculo actuarial pensional que se le ordena pagar a favor de COLPENSIONES tomando para sí el valor de los ahorros pensionales del demandante, rendimientos financieros, bono pensional y cualquier otra suma de dinero que llegue al haber de la cuenta de ahorros de este, en cuanto a las excepciones propuestas por las entidades demandadas no prosperan, excepto la de la inexistencia de la obligación de COLPENSIONES, y costas procesales a cargo de PORVENIR S.A.

Para fulminar la condena el *a quo* argumentó que la ineficacia de los actos jurídicos en Colombia debe ser declarada cuando una autoridad observa que ha sido violentado un derecho social fundamental. Que cuando la ineficacia de un acto jurídico o la nulidad de ella es declarada por traer efectos adversos a una de las partes, se entra a una institución propia del derecho denominada el principio de relatividad de los actos jurídicos que benefician o perjudican a los que han participado en él, no a los terceros.

Arguye que COLPENSIONES es un tercero absoluto frente al acto jurídico de traslado, porque ni la constitución, ni la ley le obliga a estar atento a ese acto jurídico y, por lo tanto, las consecuencias negativas de la ineficacia del traslado no tienen por qué recaer en esta entidad y obligarle a reconocer una pensión pues habría un detrimento patrimonial al Estado.

Luego adujo que, las actividades que realizan las administradoras de fondos de pensiones con carácter mercantil financiera, realizan una actividad fiduciaria y que está definido por la jurisprudencia de décadas atrás que en ese contrato no hay una obligación de resultado, pero si ha exigido la ley y la jurisprudencia una obligación de medio que es la de cabal diligencia y asesoría a la persona que realiza el contrato de fiducia. La doctrina lo denomina como la obligación de diligencia debida o de buen consejo y por lo tanto, cuando las administradoras de fondos de pensiones no dan información clara, veraz y oportuna al momento del traslado y a lo largo del proceso, conforme al artículo 10 del Decreto 720 de 1994 son responsables directamente por los perjuicios, por los daños, por el menoscabo al acceso a la seguridad social en

pensiones que traiga el beneficiario, mas no a trasladar los dineros de la cuenta de ahorro individual sino a emitir un título pensional, y si la persona ya ha cumplido la edad obligar a la AFP a pagar la pensión como si fuera del RPM, mediante un cálculo actuarial pensional.

Finalmente, concluyó el juez, que no encuentra prueba alguna de que los fondos privados demandados hubieren entregado al actor una información clara, veraz y oportuna al momento del traslado, y si bien en el proceso se encuentran formularios de afiliación, son pre-formatos que contienen una leyenda interior que no demuestran que se ha hecho el traslado de manera libre y voluntaria por lo que declaró la ineficacia de la afiliación pero indicó que la consecuencia de esta ineficacia no es la afiliación al RPM porque ya está prohibida al faltarle al demandante menos de 10 años para pensionarse, por lo tanto la pensión de vejez estará a cargo del fondo privado, en igual sentido manifestó que la excepción de prescripción propuestas por las AFP'S demandadas no prospera en razón a que los derechos sociales fundamentales como son el acceso a la seguridad social no prescriben.

### **3. DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN:**

La sentencia fue apelada por la apoderada judicial de PORVENIR S.A. y de Colpensiones en los siguientes términos:

#### **APELACIÓN DE PORVENIR S.A.**

La apoderada judicial de PORVENIR S.A., argumentando que, en efecto PORVENIR S.A. suministró de forma oportuna y necesaria la información requerida por parte del demandante en su momento, para efectos de tomar la decisión de traslado de régimen pensional, cumplió también con las cargas exigibles por la normatividad de la época, pues en dicha época la obligación de suministrar herramientas financieras no existía si no que surge a partir del año 2014, de igual manera no se le exigía a las AFP entregar proyecciones pensionales que permitieran al afiliado tener una identificación sobre la diferencia entre la mesada pensional de un régimen y otro.

Indica que el hecho de que la afiliación al fondo por parte del afiliado no se ajuste al interés económico que el actor plantea hoy con la demanda, no puede ser considerado como un motivo para concluir que su consentimiento estuvo viciado o alterado y que no se le entrego la información necesaria para efectos de tomar la decisión de trasladarse, por el contrario el actor tenía en su deber la obligación de buscar

información en línea con el deber de diligencia en sus propios negocios, por lo que el valor de la prestación que se define dentro del RAIS depende de la volatilidad del mercado y de la economía, lo que en su momento no se podía prever.

Expone que, frente a la condena en perjuicios, dichos perjuicios no se encuentran acreditados por la parte demandante dentro del proceso, pues quien alega el perjuicio debe probarlo, de manera que la diferencia entre la que fuera la mesada pensional en el RAIS vs en el RPM no puede ser tomada como un perjuicio acreditado en la medida que la parte demandante dentro de su demandan y las pruebas practicadas no logró acreditar en efecto que el perjuicio alegado fue causado.

### **APELACIÓN COLPENSIONES.**

La apoderada de COLPENSIONES apela sentencia indicando que se encuentra inconforme con la decisión del juez de instancia toda vez que se imponen obligaciones a COLPENSIONES como que se realice una subrogación pensional, con el fin que sea dicha entidad la que reconozca la prestación económica que le fue ordenada a PORVENIR S.A. en favor del demandante.

Expone que el hecho de hacer una inaplicación constitucional para este caso a la ineficacia del traslado por considerarse una norma de menor rango constitucional no puede violentar derechos constitucionales, pues solamente se están teniendo en cuenta los derechos constitucionales del demandante pero se están desconociendo los derechos en favor de PORVENIR S.A. como los consagrados en el artículo 48 y 334 de la Constitución Política, por lo que indica que si la constitución es norma de normas como se puede desconocer dentro de estos proceso de declaratoria de ineficacia precedentes constitucionales que precisamente hacen alusión a esa previsión expresa en la norma en la cual se indica que una persona cuando le falten menos de 10 años para pensionarse no se puede trasladar, puesto que esa imposibilidad o esa previsión de trasladarse obedece a situaciones de tipo económica, por lo que si dentro de la sentencia se indica que debe darse relevancia a los principios constitucionales, al mismo tiempo se estarían desconociendo los que ya fueron estudiados por la Corte en la Sentencia C - 1024 de 2004.

Manifiesta que no se puede desconocer que si COLPENSIONES es un tercero absoluto dentro de la declaratoria de la ineficacia, no sería consecuente con las motivaciones que se indican puesto que se están desplegando una serie de obligaciones las cuales no tendría que asumir, pues si se logra probar dentro del

presente proceso que hubo una falta de información por parte de la AFP, es esta misma la que debe asumir esa responsabilidad de pagarle al actor los perjuicios que tuviesen lugar, pero no la consecuencia de que se declare como afiliado al RPM y por consiguiente COLPENSIONES en el futuro con las ordenes de la sentencia tenga que seguirle pagando la prestación económica.

Indica que dentro del presente proceso no se realizó la debida reclamación administración, pues lo único que pretende el demandante es la declaratoria de la ineficacia y que COLPENSIONES reciba a modo de devolución unos aportes que tiene cotizados en el RAIS, por lo que la apoderada considera que se estarían violando esos derechos de defensa que tiene COLPENSIONES toda vez que esto no ha sido objeto de litigio, pues el demandante ni siquiera tiene las semanas cotizadas puesto que con la proyección pensional que se arribó al proceso no se hace mención ni se tiene claridad si el demandante si cuenta con las semanas suficientes para hacerle el reconocimiento de la prestación económica de vejez, por lo que dichas condenas impuestas que afectan a COLPENSIONES resulta que son excesivas en la sentencia, por lo que el juez no debió resolver frente a ello evitando emitir fallos ultra y extrapetita conforme a los artículos 285 y S.S del Código General del Proceso.

Aduce que respecto a la subrogación pensional a efectos de lo que se indica en la sentencia, que COLPENSIONES asuma en el futuro esas obligaciones que fueron interpuesta a la AFP PORVENIR S.A., en lo que tiene que ver con la connotación pensional esta no se detiene frente a los lineamientos de defensa impartidos por la entidad para la defensa de los procesos de ineficacia del traslado que deba entenderse como un efecto de la declaratoria de la ineficacia, por lo que no es una obligación por parte de COLPENSIONES que seba ser aceptada, pues se entiende que la connotación pensional es un proceso que se legaliza por un contrato que realiza COLPENSIONES con un empleador, pero con efecto de otro tipo de prestación como las pensiones de jubilación a efectos de que los empleadores se subroguen de estas prestaciones y sea COLPENSIONES quien siga pagando las prestaciones, pero no se debe aceptar que son procedentes para las declaratoria de ineficacia.

Expone que ya está claro que el demandante tiene la edad, pero no se tiene claridad frente a si tiene o no las semanas necesarias, por lo que tiene duda si frente a este tipo de situaciones realmente vale o no la pena determinar lo que ha dicho la Corte en los casos de que no se acepte la declaratoria de la ineficacia cuando se habla de una persona ya pensionada, pues en el presente caso el actor no es pensionado pero

posiblemente PORVENIR S.A. ya inicio la realización de la emisión de bonos pensionales.

Indica que la Corte incluso en esos casos de las dilatorias de ineficacia de las personas que ya han sido pensionadas, realiza el análisis de mirar entonces la posibilidad de retrotraer esas declaratorias de ineficacia hacia atrás, pero que no resultan ser favorables puesto que obedecen a perjuicios de tipo económico, por lo que se deben analizar este tipo de situaciones en cada caso particular, sin desconocer los precedentes constitucionales, como las sentencias C-789 de 2002, 0072 de 2010, donde indican que una persona como el demandante no puede retornar al RPM puesto que no cumple con los criterios establecidos en la normal al encontrarse a menos de 10 años para pensionarse.

Manifiesta que contrario a lo manifestado por el juez, considera de manera respetuosa y entendiendo la posición jurídica que hace el juez de instancia, no se considera que se esté vulnerando un acceso a la seguridad social y pensiones al demandante, pues como se dejó probado en el presente proceso existen dos regímenes que son diferenciales y en ningún momento se demostró en el proceso que PORVENIR S.A. le esté negando al demandante una prestación económica de vejez.

Expone que la única motivación del demandante para acudir a la jurisdicción ordinaria es la diferencia del valor de la mesada pensional, pero no se allegan pruebas que permitan establecer que si hay una afectación a la congrua subsistencia del demandante.

Finalmente le solicita al Tribunal revocar la sentencia en primera instancia en cuanto a las órdenes que fueron impartidas a COLPENSIONES, y confirmando en el sentido de que se debe absolver a COLPENSIONES por ser un tercero absoluto dentro de la ineficacia.

#### **4. DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA:**

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, los apoderados de PORVENIR S.A. y de COLPENSIONES allegaron escrito de alegaciones, en los que señalaron resumidamente lo siguiente:

#### **ALEGATOS DE PORVENIR S.A.**

## **1. LAS COMPETENCIAS EXTRA PETITAS Y ULTRA PETITAS DEL JUEZ DE INSTANCIA NO SON ILIMITADAS.**

En relación con los perjuicios a los que se refiere el juez de instancia en su motivación y posterior condena, estos no se encuentran demostrados por cuanto las simulaciones pensionales no están en un nicho jurídicamente consolidado. Además, no son un derecho adquirido por la demandante, pues ésta carece de un reconocimiento de derecho pensional por parte de las AFP'S demandadas en el proceso, ya que para el momento del presente pronunciamiento este aún se encuentra en construcción. En este orden de ideas, no se puede pretender por el juez de instancia el reconocimiento de un perjuicio cuando la demandante no logra probar que éste efectivamente, se presentó.

Si bien el juez hizo uso de las facultades extra y ultra petita, de las que trata el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, claramente hubo un uso indebido de estas facultades, pues en un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 3614 de 2020, se establecen los requisitos que el juez debió observar para fallar extra y ultrapetita, y, para el caso de la sentencia extra petita, se debe considerar que, en primer lugar, los hechos que originen la decisión deben haber sido discutidos en el proceso y, segundo, que tales hechos estén debidamente acreditados, requisitos que no se cumplieron para este casos en concreto.

En el presente caso entonces, la demandante en el escrito de demanda no se refiere a un perjuicio en el alcance que el juez de instancia le está dando y este, además, no fue probado en el proceso.

Así las cosas, no se estaría cumpliendo con los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia para que se puedan dictar sentencias extra o ultra petita, por lo cual se solicita al Tribunal que **se revoque** la condena en relación con una indebida aplicación de estas competencias.

## **2. DECLARATORIA DE LA INEFICACIA DE LA AFILIACIÓN AL RAIS.**

En este punto se debe anotar que, no existían razones fácticas o jurídicas para declarar la ineficacia del traslado del Régimen de Prima Media al de Ahorro Individual, pues la decisión de la parte actora se realizó de forma espontánea, sin presiones o apremios de alguna naturaleza. Además, el formulario de suscripción cumplía con los requisitos exigidos en la ley para el momento de la afiliación, pues:



- 2.1. Mi representada, al momento de realizar el traslado de la parte accionante al Régimen de Ahorro Individual, cumplió con su deber de información establecido para la época en el artículo 97 del Decreto 663 de 1993, pues, se le entregó a la parte demandante la información necesaria y obligatoria para entonces dentro del mismo Formulario, el cual se recuerda es revisado y aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia, y sus requisitos se regulan en el artículo 11 del Decreto 692 de 1994.
- 2.2. Adicionalmente la parte demandante contó con varias oportunidades para trasladarse nuevamente de régimen y no lo hizo, por el contrario, permaneció en el mismo régimen pensional privado, de lo cual solamente es posible concluir que siempre mantuvo un interés en mantenerse vinculado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.
- 2.3. Por otro lado, de los hechos narrados en la demanda y de lo sucedido y expuesto en la audiencia de primera instancia, se infiere que la motivación de la parte actora para iniciar este proceso es la diferencia en la mesada pensional entre los regímenes. Por lo tanto, es palmario que lo que motiva a la parte demandante a solicitar la nulidad o ineficacia de su traslado de régimen de pensiones no reposa en la forma en cómo este se produjo, sino en el supuesto hecho de no cumplirse sus expectativas sobre el eventual monto de la pensión que recibiría en este; monto que, como es obvio suponer, no podía ser determinado en el momento en el que se presentó su vinculación, al depender de muchas variables que no eran conocidas en su momento. Esa es la razón por la cual la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha explicado que de la sola circunstancia de no cumplirse las expectativas pensionales no puede predicarse un engaño.

Si lo anterior no fuera suficiente, se recuerda que, mi representada ha hecho campañas masivas para la educación del consumidor financiero y ha realizado diferentes comunicados de prensa informando cambios normativos, como se puede extraer de la documental aportada con la contestación de la demanda.

- 2.4. Aunado a lo anterior, Se recuerda que la prueba documental que extraña el juez de primera instancia en su fallo, frente a aquellos documentos que acrediten la entrega de información, no era una obligación vigente para el momento del traslado de la parte actora, pues esta obligación surgió con la Circular 016 de 2016 de la Superintendencia financiera de Colombia, teniendo en cuenta lo anterior, no es cierto que mi representada se encuentra en una mejor posición probatoria que acredite lo solicitado.

- 2.5. Así mismo, se resalta que la obligación del buen consejo, la doble asesoría, e incluso la de desincentivar la afiliación son obligaciones posteriores, surgidas a partir del año 2010 y 2014, lo anterior fue recapitulado y objeto de pronunciamiento en las sentencias de la Corte Suprema de Justicia SL SL1688- 2019, CSJ SL1689-2019 y CSJ SL3464- 2019, en consecuencia, tales obligaciones no existían para la época de la afiliación y mucho menos las mismas se pueden aplicar de manera retroactiva.
- 2.6. En el presente proceso también se avizora un incumplimiento de la parte accionante del deber de diligencia y cuidado en sus propios negocios, lo cual conlleva a que la misma no pueda ser beneficiaria de su propia culpa o negligencia en su actuar, lo anterior queda corroborado con el accionar sistemático y reiterado por la parte demandante.
- 2.7. Por último, se resalta que la totalidad de condiciones del Régimen de Ahorro Individual no son impuestas por las Administradoras de Fondos Pensionales, por el contrario, dichas condiciones para adquirir diferentes prestaciones dentro del régimen se encuentran en la Ley 100 de 1993, en consecuencia, **la ignorancia o desconocimiento de esta no sirven de excusa**, tal y como lo establece el artículo 9 del código Civil Colombiano.

Teniendo en cuenta lo argumentado anteriormente, y la validez de la afiliación, consideramos que, la presente declaración de ineficacia en el traslado de régimen pensional de la parte demandante consecuencialmente debe ser revocada.

Ahora bien, si se decidiera por parte del Honorable Tribunal, dejar en firme la ineficacia de la afiliación, se solicita no se condene al traslado emolumentos económicos distintos a los aportes y rendimientos del demandante, pues, las sumas correspondientes a los gastos de administración tienen por mandato legal una destinación específica que, se encuentra en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, destinando así el 10% del IBC a la cuenta de ahorro individual, el 0,5% al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del RAIS, y el 3% restante a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes.

En el presente caso, es claro que dichos descuentos, han cumplido plenamente con su cometido y no se encuentran en el patrimonio de la AFP, pues se han destinado a cubrir los gastos en que se incurrió, para la generación de frutos o rendimientos que hoy se ven de manera positiva en la cuenta de la afiliada y el cubrimiento de los riesgos de invalidez y muerte que se han venido disfrutando hasta la actualidad y que no pueden retrotraerse pues la cobertura y el servicio ya se ha prestado y este último no es posible devolverlo o retrotraerlo por parte del afiliado.

- Atenta contra toda lógica jurídica la declaratoria de un enriquecimiento sin justa causa debido a la inaplicación de las normas legales que regulan las restituciones mutuas, derivadas de una nulidad o ineficacia de un acto jurídico ordenando devolver o restituir un bien (en este caso una suma de dinero depositada) las sumas que invirtió para el mantenimiento de dicho bien e incrementarlo.
- Por si lo anterior fuera poco, se recuerda que la inversión de dichos gastos de administración en seguros previsionales y en la generación de rendimientos, no se dio de manera arbitraria, sino por el contrario se dio de acuerdo con el mandato legal establecido en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 y a la obligatoriedad de la garantía de rentabilidad mínima establecida en el literal e) del artículo 60 de la Ley 100 de 1993.
- Toda decisión judicial de traslado de régimen pensional, debe tener como objetivo constitucional, la estabilidad y sostenibilidad financiera del Sistema de Seguridad Social en Pensiones, por lo que es imperioso en la actualidad, y de acuerdo a la coyuntura económica, hacer un análisis macro de las consecuencias que se derivan de autorizar solicitudes de traslados que no cuentan con los requisitos para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, tal y como se estudió por este mismo Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en sala extraordinaria del 14 de agosto de 2019 a las 2 PM en virtud de lo establecido en el artículo 35 del CGP donde decidió unificar su jurisprudencia, en sentencia dentro del proceso del proceso 05001310500720150129501 negando las ineficacias de traslado en la afiliación, con base en la sostenibilidad financiera del Sistema de Seguridad Social en Pensiones.
- Las anteriores conclusiones frente a la ineficacia en la afiliación y en la manera en cómo deben operar las restituciones mutuas para hacer compatible el régimen y la sostenibilidad del sistema se han recogido y enriquecen con el concepto de la Superintendencia Financiera de Colombia del 17 de enero de 2020 Radicación 2019152169-003-000 el cual fue solicitado por ASOFONDOS.

## **ALEGATOS DE COLPENSIONES.**

El Juez Tercero Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia declaró la inaplicación constitucional de pérdida del régimen de prima media con prestación definida y por lo tanto el demandante sigue inmerso en el RPMPD pero a cargo de la AFP PORVENIR S.A., toda vez que dicha entidad faltó al deber de buen consejo al no verificar las condiciones del demandante, causando perjuicio económico y por ello le ordena a la AFP reconocer pensión de vejez bajo al demandante bajo el régimen de prima media,

ordenando a su vez que mi representada debe asumir en el futuro las obligaciones de la AFP codemandada como efecto de la subrogación pensional, cuando la subrogación no es un efecto de la ineficacia del traslado, tal como lo ha indicado en reiteradas ocasiones las diferentes salas de este Tribunal.

Esta decisión no se comparte por la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, motivo por el cual se solicita al Honorable Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral, sea revocada la sentencia de primera instancia debiendo ABSOLVER a mi representada de las pretensiones de forma integral y no acceder a la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen por las razones que se indican a continuación:

*Respecto a la información suministrada por las AFP, no debe subestimarse la información suministrada por las AFP al momento del traslado y durante el tiempo que duró afiliada al RAIS y cuál es el alcance de la asesoría brindada al momento de la afiliación, esto es para el año 2003, cuando se afilió a la AFP PORVENIR S.A. entidad donde se encuentra afiliado en la actualidad. La Corte Suprema de Justicia Sala Laboral en sentencia **SL1452-2019**, estableció las reglas actuales en materia de ineficacia del traslado, el grado de intensidad del deber de asesoría, debiendo evaluarse el cumplimiento de este deber con base en la vigencia de las normas. No se hace razonable ni jurídicamente válido imponer a las administradoras obligaciones y soportes no previstos en el ordenamiento jurídico vigente al momento del traslado de régimen, desvirtuándose el principio de confianza legítima, violando el debido proceso inclusive para Colpensiones, quien sin haber participado en el trámite de traslado es quien debe afrontar la carga de la prestación económica de pensión de vejez cuando ni siquiera fue solicitada en las pretensiones y ni siquiera se demostró el número de semanas necesarias para otorgarla, esto es, 1300 semanas.*

Ahora, respecto a que se causó perjuicio económico a la parte demandante por parte de las AFP privadas, se evidencia que para la fecha del traslado al RAIS la parte demandante no tenía ningún derecho consolidado o expectativa legítima respecto de la pensión y, por lo tanto, no era posible determinar la certidumbre de las consecuencias de afiliarse al RAIS. Es por ello, que la carga de la prueba no está sólo en cabeza de las AFP, por lo que se está desconociendo e inaplicando el artículo 1601 del C.C. en la medida en que la prueba de la diligencia o cuidado incumbe a quien ha debido emplearla, por lo que debe tenerse en cuenta las condiciones particulares de la parte demandante, tal como lo ha resaltado la Corte en sentencia **T-422-2011**, a su vez debe tenerse en cuenta que el afiliado también tiene la obligación de asesorarse en los términos del **artículo 4 del Decreto 2241 de 2010**.

El **SILENCIO** de la parte demandante en el transcurso del tiempo, debe entenderse como una decisión consciente de permanecer en el régimen seleccionado; aspecto que no fue analizado en la sentencia de primera instancia, existiendo elementos notorios que exponían la intención de la parte demandante de permanecer en el RAIS, como fue el hecho de permanecer más de 15 años afiliado al mismo régimen pensional.

Si partimos del amplio análisis doctrinario, jurisprudencial y constitucional que hace el a quo, resultaría demostrado y probado que no es posible acceder a las pretensiones de la parte demandante por aplicación constitucional de la ineficacia, al resultar violentados principios como el de sostenibilidad financiera conforme lo desarrollado por el **artículo 48 y 334 de la Constitución Política de Colombia** en concordancia con el artículo 2 y 4 de la misma Carta.

La Corte se ocupó del tratamiento dado por la jurisprudencia constitucional a la problemática que surge en torno a quienes se trasladaron al régimen de ahorro individual y unificó su jurisprudencia en sentencia **SU-130 de 2013** advirtiendo que, “de conformidad con lo previsto en los artículos 13, literal e) y 36, incisos 4° y 5° de la Ley 100 de 1993, tal y como fueron interpretados por la Corte Constitucional en las Sentencias **C-789 de 2002** y **C-1024 de 2004**, únicamente los afiliados con quince (15) años o más de servicios cotizados a 1° de abril de 1994, pueden trasladarse “en cualquier tiempo” y conservar los beneficios del régimen de transición” y el demandante no cumple con los requisitos.

Por lo tanto, el derecho a trasladarse NO es absoluto y debe atender criterios de sostenibilidad financiera y expectativas pensionales. Por eso, como se indicó previamente, desconocer el principio de sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones (artículo 48 C.P. adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005) al declarar la ineficacia del traslado de un afiliado del RPMPD a RAIS, pone en peligro el derecho fundamental a la seguridad social de los demás afiliados como lo reconoció la Corte Constitucional en sentencia **T-489 de 2010**.

La orden impartida por el juez en contra de mi representada de reconocer y pagar pensión de vejez en el futuro no es posible, exceden el objeto del litigio, cuando dentro de los hechos y pretensiones de la demanda no fue solicitada, mucho menos el demandante acredita los requisitos de semanas y así quedó demostrado en la sentencia cuando se indicó en parte resolutive que se reconocerá cuando este complete las 1300 semanas cotizadas. Por lo tanto, en garantía de los derechos al debido proceso, de defensa y de contradicción de la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES-, y con la intención de mantener el equilibrio procesal

entre las partes, debió el Juez de Instancia ABSTENERSE de emitir juicio alguno respecto de lo allí decidido y limitarse a resolver el asunto planteado en la demanda y en su contestación.

En consideración de lo anterior, debe REVOCARSE la sentencia de prima instancia y no declararse la ineficacia del traslado, debiendo ABSOLVERSE de forma integral a mi representada; Colpensiones.

Sin embargo, de ser considerado por la Sala que resulta procedente declarar la ineficacia del traslado, y ordenar a COLPENSIONES asumir las obligaciones que devienen de las pretensiones formuladas por la parte demandante, le solicito respetuosamente se ordene la devolución de la totalidad de los aportes al RPMPD, de manera que se garantice el reintegro de la totalidad de la cotización, esto es: Recursos cuenta individual de ahorro, cuotas abonadas al FGPM, rendimientos, bonos pensionales, seguros Previsionales, cuotas de administración, mermas en la cuenta individual (Sentencias CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989, CSJ SL 17595-2017, CSJ SL 4989-2018 y CSJ SL 1421-2019, rad. 56174 y la sentencia del CSJ **SL2329-2021**)

## **5. PROBLEMA JURÍDICO PARA RESOLVER:**

El problema jurídico para resolver se circunscribe a establecer si la afiliación del demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad es ineficaz y de serlo, en qué términos y condiciones se debe realizar el traslado a COLPENSIONES del importe de las cotizaciones efectuadas en el RAIS por el demandante.

Tramitado el proceso en legal forma y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la APELACIÓN y de la CONSULTA de la sentencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 14 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes,

## **6. CONSIDERACIONES:**

De conformidad con lo dispuesto el art. 14 de la Ley 1149 de 2007 además de resolverse la apelación de PORVENIR S.A. y COLPENSIONES se consultará la sentencia en favor de esta última entidad por haberle resultado adversa, por lo que, la legalidad del fallo será estudiada en su integridad.

Primeramente, es necesario manifestar que el traslado o afiliación a los distintos regímenes pensionales la establece el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, disponiéndose además en los Arts. 60 y 114 de esta ley, como en los arts. 10, 12 y 15 del Decreto 720 de 1994 vigente para la época del traslado del demandante, que el traslado de régimen pensional debe partir de la cabal y completa asesoría que lleve a un asegurado a tomar una decisión responsable e informada, asesoría que ha de entenderse pedagógica, es decir, realmente entendible para cada persona conforme a su grado de cultura y su situación particular, pues los casos no presentan las mismas características o condiciones.

La jurisprudencia de la SCL de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la sentencia SL12136-2014 del 03 de septiembre de 2014, abandonando el concepto de **nulidad** del traslado, precisó que la omisión en la debida asesoría de las AFP al momento del referido traslado lo convierte en **ineficaz**, por violentar la exigencia del literal b) del artículo 13 de Ley 100 de 1993, sobre la obligatoriedad de que tal manifestación de traslado fuera libre y voluntaria y contempló, que de no ser así, la afiliación respectiva quedaría sin efecto y podría realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.

Tal posición, que constituye a la fecha la línea jurisprudencial de la SCL de la Corte Suprema de Justicia sobre dicho tema, ha sido ratificada de manera reiterada en todos los pronunciamientos emanados de dicha corporación, como en las sentencias SL1688-2019 y SL1689-2019, ambas proferidas el 8 de mayo de 2019, en las que, además la Corte fijó unas conclusiones jurisprudenciales en torno al tema de la ineficacia o nulidad de traslado de régimen, las que se resumen de la siguiente manera:

1. Las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional. primeramente, con un deber de información necesaria (en vigencia del decreto 663 de 1993), luego de asesoría y buen consejo (en vigencia de la Ley 1328 de 2009 y el decreto 2241 de 2010), y finalmente de doble asesoría (en vigencia de la Ley 1748 de 2014 y el decreto 2071 de 2015)
2. La simple constancia del consentimiento informado vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acredita un consentimiento, pero no que haya sido informado.

3. La carga de la prueba de demostrar que el afiliado recibió la información debida, veraz y suficiente cuando se afilió, le corresponde a la AFP.
4. El precedente de la CSJ en torno a la ineficacia del traslado no aplica sólo a los casos en que el afiliado se cambia de régimen pensional a pesar de tener consolidado un derecho pensional, o contar con una expectativa pensional o derecho a la transición del art. 36 de la ley 100 de 1993, sino en todos los casos de incumplimiento del deber de información.

En el presente asunto, está probado, que el accionante, estando afiliado al régimen pensional de prima media administrado por el ISS, hoy COLPENSIONES, según historia laboral que reposa a folios 16 a 19 del expediente (Documento 02 del expediente digital), se afilió a la administradora del RAIS HORIZONTE hoy PORVENIR S.A. el 15 de mayo de 2003, como se advierte del formulario de afiliación a dicho fondo que milita a folio 14 del expediente (documento 02 del expediente digital), con efectividad a partir del 1 de julio de 2003, conforme se extrae del certificado SIAFP que milita a folio 64 (Documento 02 del expediente digital).

De otra parte, si bien el demandante no es beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues no contaba para el 1º de abril de 1994 con 40 o más años de edad o 15 años de servicio, ello no es óbice para que la AFP HORIZONTE hoy PORVENIR S.A. en el año 2003 estuviera en la obligación de suministrarle la información clara, completa y oportuna respecto de las ventajas y desventajas de cada régimen pensional; sobre todo **cómo alcanzaría la pensión de vejez y de qué dependería su monto en el RAIS.**

Sobre el deber de información antes citado, en el interrogatorio de parte que fue absuelto por el demandante, el cual se encuentra grabado a partir del minuto 00:18:07 del video de la audiencia de conciliación, trámite y juzgamiento, no confiesa que la AFP HORIZONTE hoy PORVENIR S.A. le hubiere brindado toda la información, completa, clara y oportuna que se requería para materializar su afiliación al RAIS, pues no manifiesta que se le haya ilustrado sobre aspectos neurálgicos de los regímenes pensionales, como lo son las características de uno y otro régimen pensional, los requisitos para acceder a las prestaciones económicas en cada uno de ellos, la forma de liquidación de la mesada pensional en cada régimen, la oportunidad de trasladarse entre regímenes y entre administradoras y los términos para ello, entre otros aspectos que resultan necesarios para considerarse que se otorgó una información completa, comprensible y suficiente.



Ahora, para probar dicha asesoría, no basta la firma del formulario con la inscripción preimpresa sobre que el traslado fue voluntario, sino que se requiere que se pruebe que en realidad esa voluntad obedeció al suministro de una debida asesoría, para acreditar que el traslado se realizó con pleno conocimiento informado, lo cual no probó la AFP PORVENIR S.A., siendo su carga, como ya lo ha establecido la jurisprudencia especializada, por lo que habrá de confirmarse en esta instancia la decisión de la *a quo* de declarar ineficaz el traslado de régimen pensional realizado por el demandante en el año 2003 cuando se trasladó del RPM administrado por el extinto ISS a la AFP HORIZONTE hoy PORVENIR S.A.

De otra parte, en lo referente a las **sumas que deben ser devueltas** a COLPENSIONES, encuentra la Sala que, la orden impartida por la *a quo*, no se encuentra acorde con la línea jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en dicha materia, y por tal razón debe ser MODIFICADA en el sentido de indicar que la devolución que debe realizar PORVENIR S.A. a COLPENSIONES, deberá incluir el valor de las cotizaciones obligatorias con sus rendimientos o intereses, así como los gastos o comisiones de administración, los porcentajes que fueron destinados a pago de primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes, al pago de prima de reaseguro de Fogafín y al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, es decir el 100% del valor de las cotizaciones del demandante, sin descuento de ninguna índole, pues al declararse la ineficacia del acto de traslado, **ningún efecto jurídico puede derivarse de este** y por tanto, deben reintegrarse a COLPENSIONES, la totalidad de las sumas que hubiese recibido la AFP demandada como cotización de la demandante, como lo ha señalado de manera reiterada la SCL de la CSJ en sentencias CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y CSJ SL1421-2019.

Ha explicado la Corte Suprema de Justicia que las consecuencias prácticas de la ineficacia son idénticas a las de la nulidad, señalando la Sala Civil de la alta Corporación que: *«cualquiera sea la forma en que se haya declarado la ineficacia jurídica (entendida en su acepción general), bien porque falte uno de sus requisitos estructurales, o porque adolezca de defectos o vicios que lo invalidan, o porque una disposición legal específica prevea una circunstancia que lo vuelva ineficaz, la consecuencia jurídica siempre es la misma: declarar que el negocio jurídico no se ha celebrado jamás»* (CSJ SC3201-2018).

En este orden de ideas, como lo dispone el art. 1746 del C.C., norma que regula las restituciones mutuas en el régimen de nulidades: *“La nulidad pronunciada en sentencia*

*que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo”.*

En este sentido se pronunció igualmente la SCL de la CSJ, sentencia 31989 de 8 de septiembre de 2008 y lo reiteró en sentencias SL4964-2018, SL4989-2018, SL1421-2019 y SL1688-2019.

Teniendo en cuenta lo anterior, al tratarse de la declaratoria de un acto ineficaz que acarrea los mismos efectos de uno nulo, no es dable concebir, so pretexto del principio de la buena fe o de una buena gestión en la administración del bien, que dichas sumas queden por fuera de las restituciones, de un lado, porque se trata de rubros que pertenecen al régimen de prima media con prestación definida, y por ello son necesarios para su funcionamiento, y por otro, porque es la indebida actuación por parte de la AFP demandada, al no proveer la información clara, completa y comprensible a través de sus asesores, que tiene como consecuencia, además del hecho de generar la declaratoria de ineficacia, que deban asumir de su patrimonio los perjuicios que se ocasionen a los afiliados y las sumas sufragadas a terceros, como lo son las aseguradoras previsionales, ello con base en los artículos 2.2.7.4.1 y 2.2.7.4.3 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016, que compiló los artículos 10 y 12 del Decreto 720 de 1994.

Conforme lo expuesto en precedencia, si bien no le asiste razón a los apelantes, que alegan la improcedencia de la declaratoria de la ineficacia del traslado de régimen pensional del actor, sí les acompaña la razón en lo concerniente que los efectos jurídicos de la declaratoria de ineficacia, no podría ser los establecidos por el *a quo*, encontrándose que, en la sentencia de primera instancia se ordenó pagar en el RAIS una pensión bajo las reglas del RPM lo que no había sido petitionado en la demanda, pues la consecuencia de la ineficacia del traslado del actor al RAIS, debe ser que regresa al RPM administrado por COLPENSIONES al que se encontraba afiliado antes de su traslado al RAIS.

Así las cosas, le asiste razón a PORVENIR S.A. en cuanto argumenta en su apelación que no se le podía imponer condena una indemnización de perjuicios en lo referente al monto de la pensión de vejez que podría percibir el actor en el RAIS, comparado con el RPM.

Ahora, respecto de la devolución a COLPENSIONES de los bonos pensionales, es necesario indicar que en lo concerniente al bono pensional que eventualmente pudiera haberse pagado a favor del actor, tal decisión resulta desacertada, al menos en lo

atinente al bono pensiona tipo A, toda vez que al ser ineficaz la afiliación del demandante al RAIS, no se origina el derecho a bono pensional tipo A, y por tal razón, en el hipotético caso que el referido bono hubiese sido pagado de manera anticipada al actor, lo cual no se encuentra acreditado en el plenario, se debe efectuar la devolución al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, y no a COLPENSIONES, por lo que tal orden será precisada.

Respecto de la afirmación que realiza la apoderado de COLPENSIONES en su recurso de alzada sobre la imposibilidad legal de traslado de régimen, derivada de la restricción temporal impuesta por el legislador en el artículo 2 de la ley 797 de 2003 el cual modifico el literal e) del artículo 13 de la ley 100 de 1993, cuando le falten al afiliado menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión de vejez, es palmario que tal prohibición, se aplica en los casos de traslado voluntario, que no es lo que pretende la demandante, sino la ineficacia de su afiliación inicial al RAIS.

En lo que tiene que ver con la orden del *a quo*, de reintegrar a COLPENSIONES el bono pensional que se pudiera haberse pagado a favor del actor, tal decisión resulta desacertada, toda vez que al ser ineficaz la afiliación del demandante al RAIS, no se origina el derecho a bono pensional, al menos el tipo A, y por tal razón, si el referido bono fue pagado se debe efectuar la devolución al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, y no a COLPENSIONES, por lo que tal orden será precisada.

De otra parte, se afirma en los alegatos de COLPENSIONES, que la declaración de ineficacia del traslado del demandante al RAIS y la reactivación la afiliación al RPM, atenta contra el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional colombiano establecida en el artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, por la inexistencia de equivalencia entre los valores recibidos y los valores requeridos para el posterior reconocimiento y pago de la pensión de vejez de la demandante.

Respecto del anterior argumento, se ha de manifestar, que para efecto de declarar la ineficacia del traslado del demandante al RAIS, no es jurídicamente viable tener en cuenta el principio antes citado, pues, desde que el actor estuvo afiliado al RPM era beneficiario de las prerrogativas de este régimen pensional, conforme lo disponía la legislación, y por ello no es posible desconocer los derechos que tiene conforme las norma legales vigentes, so pretexto de someterse al principio de la sostenibilidad financiera del sistema pensional colombiano, pues a este principio el que se tiene que someter es el legislador al realizar las reformas pensionales, no que el juez para desconocer derechos ya legislados.

También le asiste razón a COLPENSIONES en su apelación, en cuanto no se le podía imponer la carga de realizar cálculo actuarial, pues la decisión no podía ser otra que declarar la ineficacia del traslado de régimen pensional, y que, en consecuencia, el actor regresaba al RPM al que se encontraba afiliado antes del traslado, con la consecuente devolución a COLPENSIONES de las cotizaciones en la forma ya explicada.

En cuanto a la excepción de PRESCRIPCIÓN formulada por las demandadas al dar respuesta a la demanda, se tiene que, bajo la óptica jurisprudencial de la ineficacia del traslado de régimen introducido por la SCL de la CSJ, al concluirse que el acto jurídico de traslado de régimen nunca nació a la vida jurídica, no es procedente aplicar la prescripción, conforme puntualmente lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL1689-2019, proferida el 8 de mayo de 2019.

Conforme a las razones fácticas, probatorias y de derecho expuestas en precedencia, la sentencia apelada y consultada será CONFIRMADA, REVOCADA y MODIFICADA en los términos anteriormente expuestos.

SIN COSTAS en esta instancia por haber prosperado parcialmente la apelación de PORVENIR S.A. y COLPENSIONES.

## **7. DECISIÓN:**

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **RESUELVE:**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia del 10 de agosto de 2021 proferida por el JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el proceso ordinario laboral promovido por el señor **NÉSTOR ALIRIO LÓPEZ GIRALDO** contra **COLPENSIONES** y **PORVENIR S.A.**, en cuanto declaró la ineficacia del traslado de régimen pensional del actor, pero por las razones expuestas en esta instancia, y se **REVOCA** en todo lo demás salvo en la condena en costas, para en su lugar:

**DECLARAR**, que por efecto de la ineficacia del traslado de régimen pensional del demandante al RAIS, su afiliación válida es la del régimen de prima media en COLPENSIONES, entidad esta a la que se le **ORDENA** reactivar sin solución de

continuidad la afiliación, e incluir en la historia laboral del actor las semanas cotizadas en el RAIS.

**ORDENAR** a PORVENIR S.A. efectuar la devolución a COLPENSIONES, del valor de las cotizaciones obligatorias con sus rendimientos o intereses existentes en la cuenta de ahorro pensional del demandante, así como los gastos o comisiones de administración, incluidos los porcentajes que fueron destinados a pago de primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes, al pago de prima de reaseguro de Fogafín y al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, es decir el 100% de las cotizaciones del demandante sin descuento de ninguna índole.

**SEGUNDO: DECLARAR** que en el evento que se hubiese pagado bono pensional tipo A, a favor del demandante, la devolución del importe del mismo, debe efectuarse al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, y no a COLPENSIONES.

**TERCERO:** SIN COSTAS en esta instancia.

La anterior sentencia se notifica a las partes en EDICTO.

Oportunamente devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, y se firma por quienes en ella han intervenido, los magistrados,

Firmado Por:

Francisco Arango Torres  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez  
Magistrado  
Sala Laboral

**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

**John Jairo Acosta Perez**

**Magistrado**

**Sala Laboral**

**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **01f5b15d616ea6eb36becebedcd55a591b534b2c54f7efccd4c3747a7ce43b4f**

Documento generado en 09/02/2023 02:16:10 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**

**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**